

Giarracca, Norma (marzo 2005). *Consecuencias sociales de la revolución tecnológica en el campo argentino : La gran transformación agraria y de los mundos "rururbanos"*. En: Encrucijadas, no. 30. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <<http://repositorioubi.sisbi.uba.ar>>

Consecuencias sociales de la revolución tecnológica en el campo argentino

La gran transformación agraria y de los mundos "rururbanos"

La gran transformación tecnológica que sufrió la producción agropecuaria en la Argentina, cuyo máximo exponente es la soja transgénica, ha generado un brillante negocio para las empresas (muchas de ellas transnacionales), relacionadas con la producción y exportación de este cultivo. Sin embargo, este verdadero festín económico trajo también aparejado un proceso de fuerte concentración de la propiedad agraria, un aumento de la desocupación rural, la depredación incesante del medio ambiente y el crecimiento de la pobreza y la indigencia, entre otros aspectos negativos. Exponer el modelo de agricultura que se está aplicando en nuestro país resulta indispensable para debatir qué tipo de sociedad estamos construyendo y cuál es la que deseamos para vivir la mayoría de los argentinos.

Norma Giarracca

Profesora de la materia "Sociología Rural"; del Seminario "La Protesta Social en el interior del país" en la Carrera de Sociología; Profesora del Seminario de Tesis de la Maestría en Investigación Social e investigadora y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA..

*A la memoria de Joaquina Moreno,
"pionera" de las Mujeres Agropecuarias en Lucha.*

Lo que en el lenguaje corriente denominamos "campo argentino" es un gran territorio de 174.898.564 hectáreas, que se centra en la tierra como recurso básico, y que está ocupado por 333.533 explotaciones agropecuarias. Este territorio, casi las tres cuartas partes del país continental, está rodeado por comunas rurales, pueblos y ciudades de menor tamaño que las capitales de provincia. En todo este conjunto, reside, vive e intenta trabajar –con resultados inciertos– una parte significativa de nuestra población. Asimismo, hasta hace un tiempo, ese "país interior" tuvo una dinámica económica articulada primordialmente al sector agropecuario (primario en general) y a las industrias y servicios derivados o conectados con él.

Desde hace muchos años, ese conjunto poblacional es el centro de nuestros trabajos de investigación en el Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani. Somos científicos sociales y, por lo tanto, estamos interesados en los mundos sociales (que incluyen el trabajo y la producción), y en los mundos culturales y políticos conformados por quienes habitan esos territorios: familias de productores y campesinos, residentes de comunas y pueblos, así como trabajadores rurales, pequeños empresarios o comerciantes dedicados a proveer insumos al sector, maestros, médicos, empleados, cooperativistas y desocupados. Poblaciones que no siempre responden a una sola categoría pues las labores se imbrican en los sujetos (casos de multiocupación) o en las familias (casos de pluriactividad), fenómeno que también observamos en los mercados (agrarios-urbanos), las múltiples culturas, las diversas capas migratorias (véase por ejemplo Giarracca, et al., 2003). Hay una tradición académica que conceptualiza a los

conjuntos de territorios y poblaciones como “regiones” (noroeste, noreste, etc.), casi siempre centradas en la dinámica de alguna producción local (caña, yerba, vid, etc.), que las articuló con mayor o menor éxito al desarrollo del capitalismo agroexportador o a la expansión del mercado interno en el modelo de sustitución de importaciones.

Pero para nosotros, científicos sociales, estos territorios –base de la reproducción de la vida material, portadores de riquezas del suelo y del subsuelo– son también conjuntos de lugares, espacios marcados por los mundos de vida de quienes los habitan. El lugar es el mediador entre el territorio y los sujetos o, dicho de otro modo, es el territorio marcado por los sujetos, donde ellos hallarán también marcas primordiales. Comprender esta fuerte relación entre el territorio, el lugar y la población que los habita posibilita otra mirada de los procesos de transformación. Nos permite tomar distancia crítica tanto de la perspectiva productivista –celebratoria del salto productivo agrario sojero– como de una sociología convencional siempre dispuesta a justificar cualquier atrocidad sobre las poblaciones en nombre de un supuesto “progreso”.

Las tendencias censales

La estructura agraria argentina –en términos generales, la resultante del acceso diferencial a la tierra por parte de particulares, comunidades o empresas para la producción agropecuaria– se diferenció de la del resto de América Latina por la presencia de un sector medio que coexistió con la estancia y que imprimió al país singularidad productiva, social y política. En los años sesenta, por ejemplo, como quedó demostrado en el histórico trabajo del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, no se registraba un porcentaje significativo de minifundistas como en Perú, Guatemala o Ecuador. En efecto, la Argentina se distinguía por contar con un amplio sector “chacarero” dispuesto a adoptar adelantos tecnológicos, organizarse en cooperativas de comercialización y representarse democráticamente. Hasta la década de 1970, la cantidad de explotaciones en producción sufrió mermas acordes con los países de desarrollo medio y urbanizaciones rápidas (véase Cuadro 1).

Durante la dictadura militar (1976-83) se dio un fuerte proceso de expansión agrícola basado en cinco productos que comenzaron a cultivarse por todo el país; entre ellos, la soja. La tecnología que acompañó este proceso fue ahorradora de mano de obra y se produjo un fuerte éxodo rural que se orientó a las pequeñas ciudades y poblados del interior que aún absorbían trabajadores.

Cuando regresó la democracia, los medianos y pequeños productores apostaron a la cooperativa, sociedad familiar y “pool de siembra” para contrarrestar los efectos concentradores de las nuevas tecnologías. Afrontaban la caída de los precios internacionales de varios productos y la respuesta estatal fue retirar las retenciones a las exportaciones y mejorar el tipo de cambio. El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 1988 registró una caída del número de explotaciones en una magnitud que es difícil determinar por la calidad del CNA de 1969 [1]. Pero si tomamos la cifras de 1960 para compararlas con las de 1988, se pueden establecer algunas tendencias: una disminución del 6,6% de las explotaciones en veintiocho años, un notable aumento de la frontera agrícola (58.162 millones de hectáreas) y, por lo tanto, el primer gran incremento de la superficie media de las explotaciones, que pasan de 264 a 412 ha, situación que se da básicamente por incorporación de nuevas tierras a la producción.

En la década de 1990, el gobierno neoliberal de Carlos Menem produce por decreto el

cambio más significativo del siglo XX para el sector agrario: la total desregulación institucional que había permitido durante todo el siglo XX la coexistencia de la pequeña y gran propiedad agraria.

A pesar de esta liberalización total y la incorporación del sector financiero a la producción (los fondos de inversión), las condiciones que imponía la convertibilidad y la privatización de los servicios, agravadas por una fuerte baja de los precios internacionales de los productos argentinos, la aspiración de mayores ganancias por parte de los grandes hombres de negocios del campo se vio limitada. En tal contexto, el camino elegido por los agentes económicos apoyados por el Estado nacional fue la “salida hacia adelante”: la especialización en las oleaginosas y sus derivados para la exportación. La empresa Monsanto, de origen norteamericano, aportó la semilla de soja transgénica y el herbicida basado en glifosato; la industria de maquinarias agrícolas introdujo la herramienta para nuevas prácticas agronómicas (la siembra directa) y los grandes agentes económicos una nueva forma de organización empresarial en una escala de producción superior a la media en la región pampeana, complementada por contratistas, subcontratistas y terceristas. El territorio elegido fue el país en su conjunto y la estrategia consistió en desplazar otras producciones, avanzar sobre montes y yungas, y sobre poblaciones campesinas e indígenas. Nótese que la superficie ocupada entre 1988 y 2002 disminuye a diferencia del ciclo de expansión agrícola anterior (Cuadro 1). Sin embargo, la soja pasa en el mismo período de 7.176.250 a 12.606.845 hectáreas mientras que, con excepción del trigo que acompaña la rotación de la soja, todos los granos disminuyen la superficie y los llamados “cultivos industriales” lo hacen en una magnitud preocupante (véase Teubal, M. 2004; Giarracca, N. 2003).

Un párrafo aparte amerita la cuestión de la tierra en la Argentina. En efecto, los actores económicos que llevan a cabo estas transformaciones –los grandes exportadores y los grandes productores que se expanden– se ubican en posiciones relativas muy ventajosas debido a la alta rentabilidad que les proporciona la tierra fértil argentina. Si los precios internacionales hacen posible producir soja en tierras marginales como aquellas arrebatadas a la naturaleza o a poblaciones con derechos consuetudinarios, es evidente que los que producen en la región pampeana, con mayor fertilidad del suelo, se apropian de una renta diferencial. Los padres del liberalismo sostenían que la tierra no debía estar en manos privadas, justamente para evitar estas “sobreganancias” apropiadas por unos pocos terratenientes, situación que socava los ideales de igualdad y democracia de tal filosofía política (véase Fernández López, M. en Cash 25/7/04). Aunque, en el siglo XIX, finalmente se estableció la propiedad privada generalizada del suelo, los Estados nacionales fijaron responsabilidades y obligaciones; negociaciones con los grandes actores privados que se plasmaron en reglas de acceso y extensión y, en algunos países del Tercer Mundo, durante el siglo XX, se llegó a promover las expropiaciones, enmarcadas en leyes de reformas agrarias.

El neoliberalismo dio por tierra con estas negociaciones. No obstante, los pequeños productores de los países poderosos lograron mantener un importante apoyo estatal, en forma de subsidios, mientras que en América Latina se los arrinconó y expolió. Sin embargo, esta situación va generando resistencias que abren nuevos caminos para las sociedades campesinas e indígenas. La protesta local, por otra parte, se orienta por primera vez en muchos años a la lucha por la tierra y los recursos naturales en el mismo registro del resto de América Latina.

Campesinos e indígenas desalojados

El proceso que condujo a los hombres del negocio sojero al avance indiscriminado sobre los territorios ocupados por campesinos comportó la aparición de “guardias blancas” contratadas por los nuevos inversores para desalojarlos. Esto sucedió en Santiago del Estero, uno de los casos más conocidos en el nivel nacional por su repercusión mediática y porque dio lugar a un informe de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Pero no fue el único.

La estrategia de incorporación de la tierra ocupada previamente por agricultores dedicados a otros productos ha sido sistemática y violenta en muchos sentidos. En los primeros años que siguieron a la desregulación, la herramienta del endeudamiento sobre la base de hipotecas sobre la tierra dio lugar a numerosos remates judiciales y traspasos de propiedades. El centro geográfico de este accionar fue La Pampa, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, donde se iniciaron las denuncias y las protestas de las “chacareras” del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Los remates y las resistencias se extendieron luego al Chaco, a Formosa, Neuquén y Tucumán. Se trataba de una población con títulos de propiedad, con acceso al crédito, que valoraba la tierra como legado de familias europeas que habían habitado, dado vida y trabajo a muchos pueblos del interior del país.

En un segundo momento, las tierras apetecidas fueron las denominadas “marginales” (de la producción capitalista). Territorios de montes, yungas o extensiones ocupadas por poblaciones campesinas desde hacía muchas décadas o por indígenas que reclaman la reparación histórica prometida por leyes nacionales y tratados internacionales. Los viejos y nuevos inversores (ingenios azucareros y sojeros, respectivamente) no contaban con la resistencia de los campesinos y aborígenes, pero no se amedrentan y utilizan la violencia para desalojarlos. Nuestros bancos de datos (basados en registros periodísticos provinciales) dan cuenta de gran cantidad de desalojos violentos en Santiago del Estero y Salta, donde los poderes estatales provinciales están fuertemente articulados con los intereses económicos (Véase CELS, 2004, GER, 2004). De modo menos atroz pero igualmente dramático, esta situación se repite en Formosa, Entre Ríos, Mendoza y en todo el país.

Este proceso de acaparamiento de tierras a cualquier precio se suma a la conducta de las empresas transnacionales que usufructúan el petróleo, el gas y el agua. Los pobladores resisten en situaciones de desigualdad pues no se resignan a dejar sus tierras, a pagar cifras exorbitantes en relación con sus ingresos por agua de mala calidad (véase Giarracca y Del Pozo, 2004) o a ser arrinconados en su territorio por las empresas petroleras. Los planes de trabajo, combinados con una producción de subsistencia, migraciones a zonas que aún requieren mano de obra, pueblos casi fantasmas, un medio ambiente depredado a la luz del día, el sufrimiento de pueblos campesinos e indígenas, pobreza e indigencia, hambre y desnutrición en todo el territorio, son las imágenes que acompañan al país del boom sojero y que, a nuestro juicio, debieran cuestionar radicalmente esta sociedad de grandes intereses privados y el Estado.

Considero que estos aspectos son primordiales para un debate acerca de qué agricultura y qué utilización de los recursos naturales está emprendiendo el país. Y hoy, al igual que en nuestros comienzos, estos interrogantes son esenciales para pensar qué inserción en el mundo y qué tipo de sociedad estamos construyendo y cuál desea construir la mayoría de los argentinos.

Nota

[1] Los datos del CNA de 1969 muestran un número de explotaciones que daría cuenta de un aumento de casi 80 mil explotaciones desde 1960. Esta cifra fue muy cuestionada por los especialistas y, en general, para estas tendencias prefiero compararlas con el CNA de 1960 (téngase en cuenta que, de tomar el de 1969, la concentración actual se acentuaría).

Bibliografía

- CELS (2003), El Estado frente a la protesta social, 1996-2002, Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.
- GER (2004), "17 de Abril: Día Internacional de La Lucha Campesina. Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina", en Realidad Económica, mayo de 2004.
- Giarracca, N. et al. (2003), Territorios y Lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en Tucumán, Buenos Aires, Editorial La Colmena.
- Giarracca, N. (2003) "Radiografía del capitalismo agrario", en Le Monde Diplomatique, mayo.
- Giarracca N. y Del Pozo, N. (2004), "To make water...Water privatization and social Protest in Tucuman, Argentina", in Bennett, Vivienne, et al., Opposing Currents: The Politics of Water and Gender in Latin America, University of Pittsburgh Press, EE.UU..
- Teubal, M. y Rodríguez (2002), Agro y alimentación en la Globalización. Una perspectiva crítica, Buenos Aires, Editorial La Colmena.